Globethics Repository



2011: ¿el parteaguas del evismo? [2011: the watershed of evismo?]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Article
Authors	Rossell Arce, Pablo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-11-05 21:47:33
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/217421

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 237, enero-febrero de 2012, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>.

2011: ¿el parteaguas del evismo?

Bolivia después del conflicto del Tipnis

Pablo Rossell Arce

Evo Morales protagonizó un momento histórico cuando asumió la Presidencia de Bolivia, empujado por una masa de actores de origen indígena-campesino que nunca antes habían logrado tal nivel de acceso a los espacios de poder estatal. Su primera gestión de gobierno (2006-2009) estuvo marcada por una serie de hitos que consolidaron su liderazgo, en el ámbito de un programa nacional-popular con el que enfrentó con éxito a la oposición de derecha. Su segunda gestión, con un liderazgo ya sólido, está marcada por la sucesión de luchas de poder entre quienes integran su base social. El reciente conflicto por el Tipnis se enmarca en la tónica de estas disputas internas.

Evo Morales irrumpió en la historia de Bolivia como la encarnación de las aspiraciones de las grandes mayorías populares, y marcó un momento histórico por cuanto sintetiza un programa de país que recoge las aspiraciones de reconocimiento de ciudadanía de los pueblos indígenas. Pero esto no debe ocultar que la potencia de Morales proviene de la aglutinación de un variopinto abanico de fuerzas sociales, conformado por cocaleros, campesinos, comerciantes informales, mineros, comunidades indígenas y también profesionales de las clases medias. Hablamos de una multiplicidad de grupos sociales, en su mayoría marginados por el Estado, con el que se relacionaron para arrancarle concesiones y, por ende, frente al cual nunca ejercieron una ciudadanía plena; se trata de amplios segmentos sociales que tradicionalmente vivieron de espaldas al

Pablo Rossell Arce: economista con estudios de maestría en Políticas Públicas y Desarrollo. En los últimos años ha sido consultor de varios organismos internacionales y ha trabajado como asesor en diversas entidades del gobierno de Bolivia.
Palabras claves: modelo de desarrollo, conflicto social, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis), Evo Morales, Bolivia.

Estado y construyendo organización social en lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denomina los «huecos» de ese Estado[1], es decir, en una ambivalente dinámica de legalidad/ilegalidad (o informalidad).

Pero tan diverso como es el abanico de fuerzas sociales que llevó a Morales a la Presidencia es el abanico de aspiraciones y demandas que está detrás. El común denominador de estas corrientes sociales es su pretensión de superar su situación de sujetos subordinados, en un entorno histórico fuertemente marcado por un manejo del poder de tipo señorial. Por otro lado, mientras que los valores del evismo[2] –nacionalismo económico, soberanía y ciudadanía para la población de origen indígena– se han legitimado frente a los paradigmas señoriales y neoliberales, se multiplican demandas particularistas de los diversos grupos de su propia base social. El reciente conflicto por el proyecto de construcción de una carretera en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (Tipnis) es, probablemente, un hecho emblemático en ese sentido.

El Tipnis es un área protegida que fue declarada Parque Nacional en 1965 y se constituyó en Territorio Indígena a principios de la década de 1990, como uno de los más importantes logros de la «Marcha por el Territorio y la Dignidad»[3], una larga caminata hacia La Paz encabezada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob). Actualmente, este territorio de una superficie superior a los 12.000 km^2 está habitado por más de 60 comunidades indígenas, cuya economía es esencialmente de pesca y recolección, aunque varias de ellas se dedican hoy a la agricultura y la venta de madera e incluso participan de ciertos circuitos de turismo ecológico.

Por otro lado, Bolivia exhibe importantes déficits de infraestructura en comparación con sus vecinos latinoamericanos; en la actualidad, las dos capitales de departamento del norte amazónico del país (Trinidad y Cobija) carecen de vinculación caminera adecuada con el resto del país[4]. En ese sentido, la vertebración interna (integración física del país) ha sido una de las más importantes prioridades para Morales, quien ha retomado un programa vigente desde la Revolución Nacional de 1952.

Así, en 2008 el gobierno inició el proceso para la construcción de una carretera entre San Ignacio de Moxos (departamento de Beni) y Villa Tunari

1. PNUD: *El estado del Estado en Bolivia. Informe nacional sobre desarrollo humano*, PNUD, La Paz, 2007.
2. Ver Álvaro García Linera: «El evismo: lo nacional-popular en acción» en OSAL. *Observatorio Social de América Latina* año VI Nº 19, 7/2006, pp. 25-32.
3. Ver Silvia Molina y Miguel Lora: «Costos sociales y ambientales de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos», s./f., <www.isiborosecure.com/tipnisdocumolinalora.htm>.
4. V. mapa interactivo de la Red Vial Fundamental en *Administradora Boliviana de Carreteras*, <www.abc.gob.bo/Mapa-interactivo>.

(departamento de Cochabamba), obra que estaba proyectada desde años atrás con el objetivo de unir las ciudades de Trinidad y Cochabamba. El proyectado tramo II de la ruta atravesaba el Tipnis, motivo por el cual los indígenas de las comunidades del parque, encabezados por la Cidob, se opusieron a la iniciativa y marcharon durante más de 60 días con amplio apoyo de sectores urbanos de clase media en el ámbito nacional. Esto culminó en una complicada y tensa negociación en la ciudad de La Paz, que dio paso a la promulgación de una «Ley Corta»[5] que declara el Tipnis como territorio intangible. Hasta el momento, el caso del Tipnis es, de lejos, el más intenso conflicto dentro de la propia base social que ha encarado el gobierno.

Este artículo ensaya algunas interpretaciones del conflicto, situándolo en la perspectiva de la trayectoria del gobierno de Morales a lo largo de sus dos mandatos presidenciales: el primero, comprendido entre 2006 y 2009, y el segundo, iniciado en enero de 2010. El argumento que guía este texto sugiere que cada periodo presidencial está marcado por momentos políticos con características específicas, y que la consolidación de un cambio de grandes proporciones en la cultura política boliviana se ha producido mediante el tránsito de una situación en la que las disputas políticas enfrentaban al oficialismo con adversarios políticos que estaban fuera de la propuesta de cambio, a una situación en la que las pugnas de poder ocurren entre los grupos que enarbolan la bandera del proceso de cambio.

Evo Morales en la Presidencia: primer momento (2006-2009)

En 2006, Morales llegó al gobierno de Bolivia como el primer presidente de origen indígena, portando un programa que bien podría ser caracterizado como «nacional-popular». «Nacional», en el sentido de que deconstruye valores referenciales de las capas oligárquicas para construir una nación más densa, y también en el sentido de que reafirma el principio de la soberanía nacional. «Popular», porque se basa en movimientos de masas que construyen su identidad frente a las elites dominantes y al sistema tradicional de dominación[6].

Hay que destacar que el primer mandato de Morales se vio favorecido por un contexto internacional inusualmente propicio para los países productores de materias primas y recursos energéticos: entre 2003 y 2008, los precios de las exportaciones de Bolivia se incrementaron en más de 200%

5. *El Deber*, 25/10/2011.
6. Hugo Cancino: «La reemergencia del discurso nacional-popular en la nueva izquierda latinoamericana. Para una discusión de los movimientos nacional-populares» en *Diálogos Latinoamericanos* Nº 13, 6/2008.

en el caso de los minerales y hasta en 65% en el caso del gas natural[7]; el crecimiento promedio de América Latina en esos años se situó por encima de 3%. En el mismo periodo, Bolivia creció más de 4% anual y desde 2006 logró superávits externos y fiscales inéditos.

Durante su primer mandato, Morales logró algunos avances que marcaron una rotunda diferencia frente a sus antecesores:

- la nacionalización de las actividades estratégicas[8], que permitió captar el grueso de la renta gasífera del país y generar excedentes en minería y servicios;
- la redacción y promulgación de una nueva Constitución Política del Estado, que institucionaliza el ejercicio de ciudadanía de los sectores populares de origen indígena-campesino y establece las bases de un nuevo pacto social.

En el ámbito del desarrollo económico, las nacionalizaciones de las actividades y empresas estratégicas facilitaron un flujo de caja incrementado para el Tesoro de la Nación, lo que hizo posible la aplicación de políticas sociales redistributivas basadas en transferencias directas de renta, como el bono Juana Azurduy para embarazadas y madres[9], el bono Juancito Pinto para los niños escolarizados[10] y la Renta Dignidad para los mayores de 60 años[11].

En el ámbito de las relaciones internacionales, el acontecimiento más importante del periodo es, sin duda alguna, la expulsión del país del embajador estadounidense en septiembre de 2008, acusado por el gobierno de Morales de promover y apoyar acciones de desestabilización.

En el ámbito político, la primera gestión de Morales quedó marcada por el intenso grado de polarización entre las elites afincadas en las regiones del este y sur del país: por un lado, Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y circunstancialmente Chuquisaca –la llamada «media luna», cuya vocación productiva gira alrededor de los hidrocarburos, la ganadería y la agricultura de exportación–; y por el otro, los movimientos sociales populares (indígenas, cocaleros, campesinos y urbano-populares), cuya base social mejor organizada está en el occidente del país[12]. En este primer momento político de la gestión de Morales, los

7. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): *Anuario estadístico de América Latina y el Caribe 2009*, Santiago de Chile, Cepal, 2010.
8. P. Rossell Arce: «¿Cómo sorteó Bolivia la crisis económica? Retos» en *Ola Financiera* Nº 5, 1-4/2010, pp. 193-202.
9. Para recibir el bono, las beneficiarias deben cumplir con una serie de controles pre- y postnatales. V. <www.presidencia.gob.bo/documentos/bono%20juana%20azurduy.pdf>.
10. V. <www.presidencia.gob.bo/bono.php>.
11. V. <www.presidencia.gob.bo/documentos/renta%20dignidad.pdf>.
12. V. Fernando Mayorga: «Conflictos y acuerdos políticos 2006-2008» en Rolando Costa (ed.): *Del conflicto al diálogo. Una mirada hacia el futuro*, FES-Ildis / FBDM, La Paz, 2009.

indígenas de tierras bajas aglutinados en torno de la Cidob se constituyeron en parte de las fuerzas de apoyo del presidente y se articularon con indígenas y campesinos de las tierras altas bajo el mando del Pacto de Unidad.

Como efecto de la polarización política, los conflictos se manifestaron con diferentes grados de intensidad y violencia en los territorios de la «media luna» y fueron resolviéndose, en lo coyuntural, mediante el uso de la fuerza pública –en su momento requirieron la intervención incluso de las Fuerzas Armadas– y, en lo estructural, mediante una larga sucesión de actos electorales que fueron consolidando paulatinamente el liderazgo de Evo Morales:

- la elección de los representantes a la Asamblea Constituyente, que favoreció al oficialismo con 51% de los votos, en julio de 2006;
- el referéndum revocatorio de julio de 2008, en el cual Morales obtuvo 67% de los votos en favor de su continuidad;
- el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución del Estado en enero de 2009, en el cual se aprobó el texto constitucional con 62% de los votos;
- las elecciones generales de diciembre de 2009, en las que Morales obtuvo un segundo mandato presidencial con un histórico 64% de los votos.

Los hitos de la primera gestión de Evo Morales se enmarcan en una fuerte corriente de nacionalismo en lo económico y en el plano de las relaciones internacionales –ámbito en el cual, por otra parte, se mantiene hasta hoy un tinte latinoamericanista–. Por otro lado, se produjo un reordenamiento del pacto social mediante la nueva Constitución Política del Estado, vigente desde 2009, y las mencionadas políticas redistributivas. Esa corriente nacionalista fue producto del rechazo popular a los resultados de dos décadas de neoliberalismo ortodoxo. En esta línea, se puede comprender la mencionada nacionalización de las actividades estratégicas (hidrocarburos, parte de la minería, electricidad, telecomunicaciones) como la construcción de un relato que expresa los antagonismos actuales como una querella entre la nación y la antinación o, para el caso, el pueblo contra la oligarquía y las transnacionales.

Al mismo tiempo, el gobierno de Morales promovió activamente una serie de pactos internacionales, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y, más recientemente, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), constituidos con la pretensión de superar la hegemonía estadounidense en la región.

La redacción y la aprobación de la Constitución Política del Estado en 2009 lograron, entre otros efectos,

mantener movilizadas a las bases del evismo; la defensa de la nueva Constitución se erigió en una bandera de lucha que fijó posiciones y consolidó el discurso oficialista, arrinconando y estigmatizando la retórica de la oposición de derecha como un discurso antipatriótico. Por su parte, la política de bonos acercó al Estado a la población bajo la forma de ayuda directa y universal, una modalidad que las familias pobres desconocían en el pasado; así se generó una identificación unívoca entre el beneficio recibido en efectivo y el gestor de tal beneficio: Evo Morales.

Sin embargo, el hito más valorado y más significativo para las grandes masas de la población de origen indígena-campesino es el cambio en sus posibilidades reales y potenciales de acceso al poder, no solo por la vía de la participación en instancias gubernamentales de toma de decisiones, sino también a través de la dirigencia de las organizaciones de base, que hoy gozan de una influencia significativa en la definición de algunos aspectos de las políticas públicas. Para estos sectores, Morales personifica la ruptura de una especie de *apartheid* nunca formalizado, que excluía a los bolivianos de origen indígena-campesino de los espacios de poder y que estuvo vigente en Bolivia hasta 2006. Este liderazgo tiene la capacidad de solidificar una adhesión política/emotiva de largo plazo que se asemeja –aunque parece más profunda– a la que logró el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) entre el campesinado, luego de la reforma agraria de 1953.

El segundo momento de Morales en la Presidencia (2009 hasta el presente)

Actualmente, Evo Morales se encuentra transitando la mitad de su segundo mandato presidencial. Este momento está caracterizado por una pérdida de brillo en la imagen del gobierno, ocasionada por el natural desgaste que acarrea el tiempo y por la forma en que el conflicto político se ha trasladado desde la lucha contra un adversario externo al evismo –«la antinación», «la oligarquía», «los neoliberales»– a la lucha entre las distintas corrientes particulares que cada movimiento social encarna.

Morales asumió este mandato en un entorno inmejorable: ganó con total transparencia las elecciones de diciembre de 2009 y logró un porcentaje de votación que haría palidecer de envidia a cualquier político; las medidas de nacionalización de las actividades estratégicas mostraban su éxito al permitir la captura de los excedentes que los altos precios de los productos de exportación generaban, y la oposición política de derecha se sumió en un descalabro del que no se recupera hasta hoy. En ese entorno, las prioridades de Morales en materia de gestión estatal se dirigieron

hacia el ámbito económico, y el presidente intensificó los esfuerzos del Estado para ejecutar un ambicioso programa de infraestructura. Pero, al mismo tiempo, en este periodo se empezaron a multiplicar las pugnas políticas internas entre las diversas corrientes de la base social del evismo[13]. Por ejemplo, información de Fundación UNIR Bolivia da cuenta de que en la primera mitad de 2010 los conflictos de carácter político-ideológico estuvieron relacionados con pugnas en torno de las listas de candidatos para las elecciones locales dentro del propio oficialismo; en ese mismo periodo, surgieron conflictos de carácter económico a partir de disputas por el control de los recursos naturales en sectores y regiones afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y, para el año 2011, se puede observar que las organizaciones que protagonizaron la mayor cantidad de conflictos son las cooperativas mineras, los sindicatos campesinos y de transportistas, las juntas de vecinos, las organizaciones indígenas etc.; es decir, sectores afines al proyecto político de Evo Morales.

Una constante a lo largo de las últimas décadas de la historia del país es el conflicto salarial, que protagonizan ritualmente los sindicatos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) durante los primeros meses de cada año. El gobierno de Morales no ha sido inmune a este tipo de conflictos, a pesar de haber intentado estrechar alianzas con una COB que expresó al principio un apoyo distante y condicionado a Morales y que, en el último año, se ha decantado por el enfrentamiento directo con el gobierno. Un elemento característico de los conflictos internos del evismo es que, cuando logran sacudir la agenda nacional, exigen la intervención del presidente en persona como juez de última instancia[14], en un intento por esquivar la función del Parlamento y de las autoridades sectoriales.

Las presiones por una mayor eficiencia en la gestión económica llevaron al gobierno de Morales a eliminar, en diciembre de 2010, la subvención a los precios internos de los carburantes, vigente desde 1997[15]. El impacto de esta medida, que los sectores populares bautizaron como «gasolinazo», generó masivas demostraciones

13. Esta tendencia a los enfrentamientos internos estaba presente antes de 2010, con episodios graves: un bloqueo de caminos en la zona de las yungas de La Paz, electoralmente comprometida con Evo Morales, se saldó con dos manifestantes muertos en 2009. «Caranavi consigue una planta de cítricos y Alto Beni tendrá la suya» en *La Razón*, 12/5/2009.
14. Las demandas sociales se dirigieron masivamente hacia el nivel central del Estado: en 2011, 46% de los conflictos. Fundación UNIR Bolivia: *Informe sobre la conflictividad en Bolivia. Enero a junio de 2011*, UNIR, La Paz, 2011.
15. Se estima que la subvención a los precios de los carburantes estuvo por encima de los US$ 300 millones; para 2011 se situó en US$ 633 millones y se espera que en 2012 llegue a los US$ 755 millones. V. Ministerio de Hidrocarburos y Energía: *Boletín Energético* año 2 Nº 61, 9-15/11/2011, <www.hidrocarburos.gob.bo/sitio/images/stories/Boletin/boletin%2061.pdf>.

de descontento social en todo el país, pero particularmente en las ciudades de La Paz y El Alto, dos baluartes de la base social del oficialismo. Luego de días de intentos infructuosos por calmar la convulsión con anuncios de medidas paliativas, el gobierno finalmente decidió dar marcha atrás y restaurar la subvención el 31 de diciembre. No obstante, el conflicto por el gasolinazo modificó las expectativas de las movilizaciones sociales que se dieron posteriormente, dado que fue la primera vez que el gobierno de Morales debió revertir una de sus decisiones de manera absoluta y contundente.

En ese contexto explota el conflicto del Tipnis, el más severo que Morales haya enfrentado en relación con su base social. Si bien la marcha de los indígenas del Tipnis cuestionaba el trazado de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos que atravesaba su hábitat, no se puede entender ese episodio sino en el marco de un conflicto que los indígenas de las tierras bajas mantienen con el gobierno desde, por lo menos, un año atrás. En efecto, una de las raíces del enfrentamiento por el Tipnis en 2011 fue la inconclusa resolución de su antecedente más inmediato: la marcha de los indígenas de tierras bajas en 2010[16], cuyas demandas se centraban en el logro de la asignación de una cuota significativamente más alta de escaños para parlamentarios indígenas que la que finalmente fue establecida en la Ley Electoral. Ambas marchas, la de 2010 y la de 2011, fueron encabezadas por la Cidob. La marcha de 2010 no logró su objetivo principal y pudo ser desarticulada por el gobierno en la ciudad de Santa Cruz, a más de 700 km de La Paz, lo que implicó una pérdida de poder por parte de la confederación indígena.

Este 2011, la propuesta de construcción del tramo San Ignacio de Moxos-Villa Tunari encerraba una serie de elementos que tenían la cualidad de devolverle a la Cidob la iniciativa política: el trazo proponía atravesar un área protegida; los afectados eran indígenas cuyos derechos colectivos han sido constitucionalizados justamente bajo este gobierno, y el principal impulsor del proyecto –Evo Morales– se mostraba en los foros internacionales como un firme defensor de los derechos de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, el contenido programático central en el conflicto del Tipnis está referido a la orientación del modelo de desarrollo. La propuesta de la carretera se constituye en un hito material y simbólico de la preeminencia de un modelo de desarrollo convencional (integración física del país) y conlleva los riesgos de la expansión de la frontera agrícola en detrimento de la preservación de zonas boscosas vírgenes.

16. Lorenzo Solíz y Claudia Vedia: «Bolivia, nueva marcha indígena» en *Cidob*, <www.cidob-bo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=446:bolivia-nueva-marcha-indigena&catid=82:noticias&Itemid=2>, 1/7/2010.

El avance de la marcha de los indígenas del Tipnis logró –por supuesto– la adhesión de las figuras políticas de la oposición, que nunca pudieron superar el estigma del oportunismo, pero también la de amplios segmentos de clase media urbana. El recibimiento multitudinario de la marcha en la ciudad de La Paz es elocuente al respecto. Las clases medias urbanas, cuyas prácticas cotidianas de consumo excluyen por completo cualquier consideración ambientalista, expresaron sin embargo su apoyo a los dirigentes de la Cidob con un discurso radical de defensa de la Madre Tierra.

No quedan muy claros los motivos por los cuales esta adhesión se dio de manera tan intensa; se puede especular, por ejemplo, que ya se nota cierto rechazo a las actitudes del gobierno en relación con quienes intentan desde el oficialismo expresar públicamente sus desacuerdos y juzgar acerca del rumbo que toma el proceso. La respuesta que ha dado el gobierno a este tipo de expresiones ha sido contundente y se ha centrado en la descalificación moral e ideológica de los descontentos. También es posible ver en la actitud de las clases medias urbanas un rechazo al uso de instrumentos legales para suspender autoridades regionales opositoras que fueron en su momento elegidas por voto popular, en un intento de cambiar los tableros regionales de poder[17].

Pero, sin duda, el acontecimiento que concitó el rechazo generalizado de la población fue la violenta intervención policial que sufrieron los marchistas el día 25 de septiembre, en un intento del gobierno de resolver el problema por la vía de la fuerza[18]. La intervención fue televisada y transmitida al país de inmediato. La reacción de la opinión pública fue de tal intensidad que el gobierno tuvo que resignarse a que horas más tarde los marchistas retomaran su medida vitoreados en cada localidad por donde pasaban. Este acontecimiento dañó la imagen del gobierno y activó el apoyo de una gran cantidad de gente que en otras circunstancias no habría salido a las calles.

En relación con el modelo de desarrollo, el conflicto por el Tipnis ha reflotado viejas tensiones entre las organizaciones de indígenas y las de campesinos que conformaron el Pacto de Unidad como plataforma de apoyo a la realización de la Asamblea Constituyente, sobre la base de la demanda de tierra y territorio, entre varias otras[19]. En este

17. Desde 2010 fueron suspendidos dos alcaldes de ciudades capitales, y actualmente los departamentos de Tarija y Beni tienen gobernadores interinos porque también se suspendió a los titulares a través de medidas jurídicas.
18. «La policía interviene la marcha por el Tipnis» en *La Razón*, 26/9/2011.
19. En este artículo, solo aludimos a algunos aspectos de las complejidades de las a menudo inestables fronteras identitarias entre campesinos e indígenas. V. la Declaración del III Encuentro de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, La Paz, 20 de junio de 2006, disponible en <www.constituyentesoberana.org/info/?q=orignarios-pronunciamiento-encuentro>.

punto, es importante destacar que ambos conceptos marcan significativas diferencias en los horizontes de progreso social planteados por cada tipo de sujeto. Para las organizaciones que se autorreconocen como esencialmente *indígenas*, el territorio es lo central, puesto que se constituye en la base de una vida económica fundada en usos y costumbres ancestrales. Las organizaciones indígenas –especialmente las de tierras bajas– propugnan el acceso al territorio y la gestión de los recursos naturales bajo formas comunitarias. Para las organizaciones que se autorreconocen como esencialmente *campesinas*, en cambio, la demanda central es el acceso a la tierra cultivable y la gestión individual o, en el mejor de los casos, familiar, del recurso tierra[20].

En la disputa que así se plantea, se puede entrever el impulso de un sector –el campesino, compuesto mayoritariamente por población de ascendencia quechua y aymara–, cuya organización política y económica alrededor de los sindicatos agrarios persigue fines de expansión territorial y de acceso a la tierra –entendido como un recurso económico–, mientras que los indígenas del Oriente pregonan la preservación, no la expansión de su modo de vida. Los reclamos del sector campesino por la titulación individual de las tierras –en detrimento de la titulación colectiva– dan indicios de la formación de un campesinado «protocapitalista», que en el largo plazo se vería beneficiado por el usufructo de la tierra en tanto capital productivo gestionado de manera privada[21].

En el campo de la compleja disputa política, la realización de la marcha indígena coincidió con el primer proceso electoral para elegir a los miembros del órgano judicial, en un hecho desconocido hasta entonces en el país y en América Latina. Las elecciones se dieron días antes de la llegada de la marcha a La Paz. Durante las semanas previas a la elección, toda la gama de partidos de la oposición hizo campaña para convertir las elecciones judiciales en un plebiscito reprobatorio de la gestión de Evo Morales, en un intento por llevar a su cauce la fuerza política del descontento de las clases medias urbanas. Y en efecto, en el conteo oficial, los votos válidos sumaron alrededor de 42%, un porcentaje similar al de los votos nulos[22]. No obstante, es dudoso que estas cifras puedan interpretarse como un indicador adecuado del respaldo popular a la figura de Morales;

20. «Hay disputas en el oficialismo por nuevo régimen de tierras» en *Página Siete*, 4/8/2011.
21. Los cocaleros son un ejemplo paradigmático de esta identidad campesina mayoritaria en regiones como los valles y el trópico de Cochabamba. «La futura ley de tierras divide más a indígenas y campesinos» en *Página Siete*, 24/10/2011.
22. «TSE: Participación ciudadana fue del 79,7% para elegir a 56 magistrados en comicios de octubre» en *Cambio. Periódico del Estado Plurinacional Boliviano*, 11/11/2011, disponible en <www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-11-11&idn=58221>.

si bien este ha caído en las encuestas, sigue siendo sin duda el líder político con mayor capacidad de arrastre en el ámbito nacional.

Si el conflicto del Tipnis ha generado algún debate sobre los horizontes deseables de sociedad –uno de estilo «desarrollista» y otro más apegado al respeto por la naturaleza–, tal debate parece estar de alguna manera ya zanjado en la esfera dirigencial del gobierno de Morales. El programa que el presidente tenía bajo el brazo al jurar su segundo mandato indica explícitamente una ruta desarrollista convencional para la Bolivia de los próximos años, y esto ha sido refrendado por las prioridades en la asignación de los recursos públicos.

En resumen: durante el segundo periodo de Evo Morales, la tónica del conflicto político está marcada por las pugnas de poder dentro de su base social. En ese contexto, el conflicto por el Tipnis cobra sentido como una lucha de poder y, de alguna manera, de cosmovisión entre los pueblos indígenas del Oriente, por un lado, y campesinos y colonizadores, por el otro[23].

Interpretaciones, presunciones y tendencias

Los movimientos recientes en la política boliviana son el reflejo de una tendencia que interpela el accionar de Evo Morales desde el interior del evismo. El conflicto del Tipnis, que ha sido el de mayor trascendencia en este periodo, ha surgido desde las bases que erigieron el movimiento nacional-popular que llevó a Morales a la Presidencia, y desde un ámbito programático –la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza– que forma parte de los postulados constitucionales del gobierno actual.

En ese marco, pese a la importancia que los actos electorales han cobrado como termómetro de la vigencia del liderazgo de Morales, sería equivocado colegir que los resultados de la elección judicial son un indicador de aprobación o de desaprobación de la gestión presidencial. Igualmente incorrecto sería atribuir a la cifra del resultado electoral la cualidad de preservar un margen respetable de aceptación de Morales.

En primer lugar, el mandato del presidente no estuvo en juego durante el acto electoral. De haber sido así, lo más probable es que se hubieran activado las lealtades de largo plazo generadas por los logros de ciudadanía de las capas populares de origen campesino, que aún ven en Morales a

23. Diferenciamos la identidad campesina/colonizadora y la indígena a partir de las formas de organización sociopolítica de cada una: el campesinado se articula mediante formas modernizantes de organización (el sindicato agrario), mientras que los indígenas recurren a (y defienden) las formas ancestrales precolombinas.

la persona que les dio la posibilidad real de acceder al poder y de aspirar a la ocupación de cualquier espacio de la vida social, económica y política de Bolivia. Por lo tanto, el voto nulo puede representar tanto a la derecha como a la izquierda opositoras, y también a los simpatizantes del gobierno que desean enviar al poder una señal en pro de una actitud más conciliadora.

Ahora bien, ¿qué tendencias se perciben una vez que los marchistas del Tipnis han regresado a sus lugares de origen? Una primera tendencia es que el carácter desarrollista de la gestión de Evo Morales se mantendrá e intensificará. Y esto es así no solo porque esa tendencia se plasmó claramente en la oferta electoral de su segundo mandato[24], sino también porque –aunque esto no siempre se ve con claridad– son los campesinos y colonizadores, con sus enormes capacidades de movilización y de organización, quienes están detrás de ese programa. En la reciente cumbre de diciembre de 2011, los empresarios privados se sumaron con entusiasmo al programa.

Una segunda tendencia es la profundización en la pérdida de iniciativa política de la oposición de derecha, al menos en los grandes temas de la agenda nacional. Estos grandes temas se presentan desde el interior del evismo, lo que deja un espacio marginal para que la oposición de derecha a lo sumo se adhiera reactivamente a las demandas de las organizaciones sociales.

Asociada a lo anterior, se percibe en la población boliviana una tendencia a desacoplar las lealtades políticas nacionales y las lealtades locales. En lo nacional, el gobierno se hace cargo de los grandes lineamientos; en lo local y regional, se mantienen espacios para las otras tendencias políticas, en tanto tengan la sensibilidad de representar las voluntades colectivas territoriales. Así, es probable que en los próximos años el evismo se vea obligado a compartir el poder en los espacios regionales y municipales.

Una tercera tendencia está fundamentada en el debate que puede llegar a darse en la sociedad boliviana acerca de la pertinencia de profundizar la vía desarrollista de progreso social, en contraposición a una vía ideológicamente anclada en el discurso de la Pachamama (el «vivir bien»), que aún no muestra claridad programática. En ese sentido, es posible imaginar que los liderazgos indígenas de tierras bajas se animen a articular una corriente política explícitamente ambientalista.

Para Evo Morales, queda claro que la capacidad de mantenerse en el poder

24. MAS-IPSP: *Bolivia país líder. Programa de gobierno*, 2009, disponible en <http://es.scribd.com/doc/19548042/Programa-de-Gobierno-masipsp>.

se basa en tres pilares: primero, en la consolidación de las lealtades de las masas populares nacionales (con demandas de producción y desarrollo económico); segundo, en la capacidad de seguir actuando como mediador de última instancia en los conflictos internos del bloque oficialista; en tercer lugar, en la posibilidad de que la crisis financiera que azota el corazón del capitalismo mundial llegue a Sudamérica con el rezago suficiente como para pensar en un aterrizaje suave, que no ponga en riesgo el crecimiento y la bonanza de la economía boliviana en los próximos tres años.

Si el liderazgo de Morales logra capear una catástrofe económica global, seguramente encontrará nuevos retos en la relación Estado-sociedad a raíz del éxito económico de su gestión. La lenta pero consistente reducción de la pobreza en Bolivia ha ensanchado la clase media en el país, que en los últimos años creció en un millón de personas[25]. En el futuro, esto implica el crecimiento de una masa de votantes cuyas aspiraciones estarán cada vez más marcadas por el acceso a bienes de consumo, por hábitos urbanos más alejados del disciplinamiento de las prácticas políticas sindicales, por identidades más individualizadas y menos corporativas, pero también por imaginarios de progreso social más alineados con la Bolivia industrial del programa de gobierno con el que Evo Morales alcanzó su segundo mandato.

25. Datos de *Cambio*, 8/11/2008 y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): «Los cambios detrás del cambio. Informe de Desarrollo Humano en Bolivia», PNUD, La Paz, 2010.

ÁBACO

Revista de Cultura y Ciencias Sociales

2011 Gijón Nº 68-69

LA SOCIEDAD DIGITAL
Especial 25 años (1986-2011)

Suscripciones

Suscripción personal: 30 euros
Suscripción bibliotecas e instituciones: 45 euros
Suscripción internacional: Europa - 60 euros (incluye gastos de envío)
América y otros países - 80 euros (incluye gastos de envío)

Ábaco es una publicación trimestral de CICEES, C/ La Muralla, 3 entlo. 33202 Gijón, España. Apartado de correos 202. Tel./Fax: (34 985) 31.9385. Correo electrónico: <revabaco@arrakis.es>, <revabaco@telecable.es>. Página web: <www.revista-abaco.com>.